

¿Retrocesos en la política de prevención y atención a la violencia?	Título
Rojas Ortiz, Grecia E. - Autor/a;	Autor(es)
Chacarera (No. 36 ene 2008)	En:
Lima	Lugar
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán	Editorial/Editor
2008	Fecha
	Colección
Género; Políticas públicas; Violencia familiar; Descentralización; Gobierno central; Violencia contra la mujer; Programas gubernamentales; Igualdad de oportunidades; Perú;	Temas
Artículo	Tipo de documento
<a href="http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/cmp-flora-tristan/20120824013209/politica36.pdf">http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/cmp-flora-tristan/20120824013209/politica36.pdf</a>	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es</a>	Licencia

**Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO**

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

**Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)**

**Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)**

**Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)**

[www.clacso.edu.ar](http://www.clacso.edu.ar)



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais  
Latin American Council of Social Sciences



## Actualidad

*El artículo presenta un análisis de la actual situación de los programas orientados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como resultado de una serie de políticas contradictorias emitidas desde el gobierno central.*

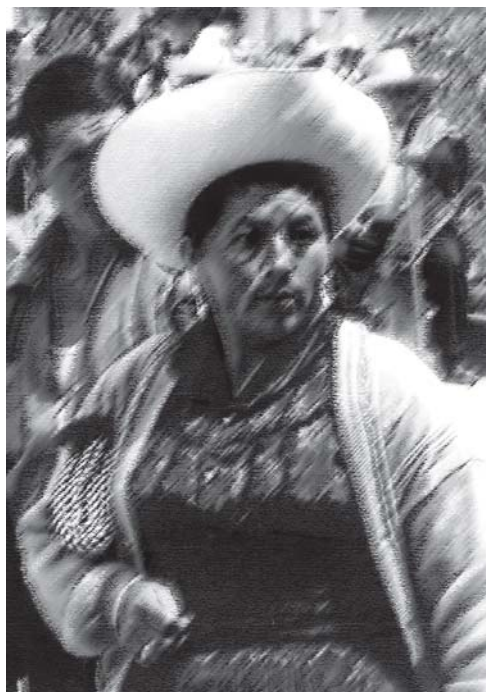


## ¿Retrocesos en la política de prevención y atención a la violencia?

**Grecia E. Rojas Ortiz\***

En el Perú, la violencia contra la mujer es la principal forma de discriminación de género que sufren las mujeres; sin embargo, en los últimos siete años las políticas de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres vienen sufriendo una serie de restricciones y limitaciones que a corto plazo producirán la eliminación de las mismas.

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado N° 27658 (17 de enero del 2002) define el proceso para la transferencia de funciones y competencias del gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales, así como los mecanismos mediante los cuales se deberá desarrollar determinadas características de gestión y buen gobierno. El objetivo principal de este proceso es «construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, con énfasis en la mejora la gestión pública».



Es decir, el aparato estatal debe lograr mayores niveles de eficiencia de tal manera que brinde una mejor atención a la ciudadanía, a través de señalar prioridades y optimizar el uso de los recursos públicos.

Bajo esta lógica se procedió a reformar la Ley del Poder Ejecutivo, reformulando las funciones del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano-Promudeh, rebautizado como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-Mimdes<sup>1</sup>, sector que agrupa y dirige los programas sociales y de género. Esta modificatoria crea el Viceministerio de Desarrollo Social pero no le asigna mayores recursos económicos, sino que obliga a la redistribución de estos recursos al interior del sector, hecho que perjudicó especialmente al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual.

Posteriormente, el Decreto Supremo N° 006-2007-MIMDES (22.06.07) establece como competencias de este sector la rectoría de las políticas públicas y actividades referidas, entre otras, al desarrollo de la mujer y el fortalecimiento de la familia (inciso a, art. 4°); respeto a los derechos fundamentales de los grupos poblacionales en condición de pobreza, pobreza extrema, discriminación o violencia familiar, social, política; el alto riesgo nutricional (inciso e, art. 4°); así como promoción, atención y apoyo a la población en riesgo (inciso f, art. 4°).

Este contexto normativo nos demuestra que las políticas en materia de género se redujeron al ámbito de la igualdad de oportunidades, mientras que aquellas referidas a la violencia contra la mujer han variado a un enfoque de riesgo social y protección a la familia. Un ejemplo de esta afirmación es que los Centros Emergencia Mujer-CEM<sup>2</sup> son considerados por el Plan Anual de Transferencia sectorial 2007 del Mimdes como «servicios de atención a personas en riesgo y vulnerabilidad».

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM (25.03.07) estableció el marco obligatorio para el desarrollo de políticas nacionales y una de las principales materias a las que se le daría prioridad en la gestión gubernamental es la *igualdad de hombres y mujeres*. Esta política nacional debe dirigirse entre otros a:

2.2. Impulsar en la sociedad, en sus acciones

y comunicaciones la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y sexual.

2.5. Atender prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres.

A pesar de que la Ley de Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres (LIO) es una prioridad, actualmente existe un proyecto de reglamentación promovido desde el Ministerio de la Mujer no obstante que el texto de la Ley Marco establece la calidad de «norma autoaplicable» de la misma. Por otro lado, el nivel de compromiso presupuestal sigue siendo un problema para la debida implementación de la Ley Marco, la misma que de no contar con partidas presupuestales específicas no puede generar ningún cambio.

En el ámbito regional, los planes regionales de igualdad de oportunidades-PRIO entre hombres y mujeres no han considerado medidas para enfrentar las conductas socio-culturales que reafirman, consolidan y preservan relaciones inequitativas de género, especialmente en lo referente al cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Muchos de estos PRIO han incorporado acciones frente a la violencia hacia la mujer.

Por su parte, el comité de expertas de la Convención contra toda forma de discriminación hacia la Mujer-Cedaw ha manifestado su preocupación porque el Estado peruano emplea los términos «equidad» e «igualdad» de tal manera que se podría interpretar que son sinónimos siendo que expresan ideas diferentes y que su uso simultáneo puede dar lugar a confusiones conceptuales. El Comité ha recomendado al Estado peruano que emplee sistemáticamente el término «igualdad» en sus planes y programas<sup>3</sup>.

El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual<sup>4</sup>-PNCVFS, como órgano integrador de las normas y políticas sobre violencia contra la mujer, fue creado inicialmente como órgano dependiente del Despacho Ministerial. A partir de la modificatoria de la Ley del Poder Ejecutivo pasó a depender del Despacho Viceministerial de la Mujer. En el año 2005 fue adscrito al Instituto Nacio-

nal de Bienestar Familiar-Inabif, ocasionando un retroceso político en materia de enfoque, jerarquía, autonomía política y presupuestal.

Al año siguiente, el PNCVFS, ante la presión ejercida por la sociedad civil, es elevado a la categoría de Oficina Pública Descentralizada-OPD, lo que le permitió independizarse administrativa y presupuestalmente, como una forma de paliar el error cometido. Finalmente, el Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES (5 de mayo de 2007) creó la Dirección General de Protección Social, organismo de línea dependiente del Despacho Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, adscribiéndole las competencias y funciones del PNCVFS y, a la vez, determinó la extinción del mismo.

La creación de la Dirección Nacional de Protección Social-DNPN concreta la variación de enfoque en las políticas nacionales regidas por el Mimdes, las mismas que pasaron de un enfoque de género a un enfoque de riesgo social y protección a la familia. Es decir, da prioridad a la unidad familiar sobre los derechos de las personas que la conforman y mina así la vida de las diversas familias existentes en nuestro país.

A ello se agrega un fuerte énfasis al tema de combate a la pobreza. Por ello, los CEM, servicios especializados en la atención a la violencia familiar y sexual, han sido considerados parte de la «Red local de Protección Social»<sup>5</sup>, paquete que debe ser descentralizado a los gobiernos locales y que, además, es uno de los tres ejes de intervención de la política de lucha contra la pobreza (Decreto Supremo N° 029-2007-PCM, Plan de Reforma de Programas Sociales).

Se Planificó que a partir de junio de 2007 (Plan Anual de Transferencias Sectorial 2007 del Mimdes) debía de iniciarse la transferencia de los Centros Emergencia Mujer a los gobiernos locales; sin embargo, este proceso aún no se inicia y, por el contrario, en una acción totalmente ilógica se han instalado 21 nuevos Centros Emergencia Mujer haciendo un total de 64 CEM a nivel nacional, cifra que cubre apenas el 3.49% de los 1 834 gobiernos locales existentes a nivel nacional. Se busca lograr que exista un CEM en cada provincia<sup>6</sup>, lo que no queda claro es cómo se continuará con el proceso de descentralización con

estos nuevos servicios y no se ha podido aclarar el porqué del incremento de CEM si han de ser descentralizados.

Finalmente, es importante señalar que el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer-PNCVHM, en la práctica, depende de manera directa del PNCVFS, el mismo que se ha visto afectado por la situación confusa de este órgano. Así el balance del cumplimiento del PNVHM 2002-2007 es deficitario y a enero 2008 no se cuenta con una nueva versión aprobada para el periodo 2008-2012<sup>7</sup>.

Cabe hacerse una pregunta: ¿es realmente necesaria la descentralización de los CEM y la desaparición del PNCVFS en el proceso de descentralización? Si bien es cierto existe la necesidad de reorganizar el aparato estatal y de redistribuir las funciones y competencias existen problemas sociales que necesitan medidas especiales por parte del Estado para su mejor tratamiento. Uno de ellos es la violencia hacia la mujer. El insuficiente trabajo de sensibilización de las autoridades locales en el tema de la violencia hacia la mujer y en especial frente a la violencia familiar, hace peligrar la continuidad de estos servicios especializados. El mejor ejemplo es el poco desarrollo y relativo apoyo que reciben las Demunas.

\* Miembra asociada al Centro Flora Tristán y del Instituto Promoviendo Desarrollo Social-Iprodes.

<sup>1</sup> «El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social propone y ejecuta la política de desarrollo social y humano promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades de la mujer, la niñez, la tercera edad y las poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, discriminadas y excluidas».

<sup>2</sup> Creados mediante R.M. N° 216-99-PROMUDEH, modificada por R.M. N° 074-2000-PROMUDEH, experiencia de atención interdisciplinaria y multisectorial de respuesta a la violencia familiar y sexual.

<sup>3</sup> Párrafos 12 y 13 de las recomendaciones al sexto informe periódico del Perú (CEDAW/C/PER/6) en sus sesiones 763ª y 764ª, celebradas el 19 de enero de 2007. La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/PER/Q/6 y las respuestas del Perú figuran en el documento CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1.

<sup>4</sup> Creado mediante el D.S. N° 008-2001-PROMUDEH, como órgano encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual.

<sup>5</sup> ¿Qué son los Centros Emergencia Mujer? Situación actual y perspectivas dentro del proceso de descentralización. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Lima, marzo 2007.

<sup>6</sup> Tomada de la página web del Mimdes, el 5 de diciembre de 2008. not11dic2007 MIMDES CEMs.htm.

<sup>7</sup> Existe una propuesta desarrollada a través de la contratación de una consultora externa del Mimdes.